

MODIFICACION DE MEDIDAS. DENEGACION EXTINCIÓN PENSIÓN DE ALIMENTOS DE HIJO MAYOR DE EDAD POR FALTA DE RELACION PADRE E HIJA. DISTINCION PENSIÓN DE ALIMENTOS HIJOS MAYORES DE EDAD Y MENORES DE EDAD. FALTA DE PRUEBA ya que no quedó acreditada que la nula relación entre padre e hija sea imputable de modo principal y relevante a la hija y se hace referencia respecto al padre:

- se trasladó a vivir a Castellón de la Plana,
- disminuyendo la frecuencia de las visitas,
- incumpléndose las visitas por parte del padre, quien solicitó una reducción del régimen de visitas, que tampoco fue cumplido por el padre, sin acreditarse justa causa,
- viviendo la niña la figura paterna como la de un padre ausente, no entendiendo la hija por qué su padre no venía a verla

Hace referencia a la sentencia del tribunal supremo de 5 de febrero 2019 a dos términos:

- a) Solidaridad familiar. modo que si esa solidaridad desaparece por haber incurrido el hijo en alguna de las conductas reprobables previstas en la ley, es lícita la extinción, porque no es equitativo que quien renuncia a la relación familiar se beneficie de una institución jurídica que se funda, precisamente, en los vínculos familiares
- b) la valoración de la concurrencia y prueba de la causa, esto es, la falta de relación manifiesta y que esa falta sea imputable, de forma principal y relevante, al hijo

Sentencia Audiencia Provincial de Valladolid de 11 octubre 2022 Número Sentencia: 364/2022 Número Recurso: 318/2022 Numroj: SAP VA 1575:2022 Ecli: ES:APVA:2022:1575 Ponente: [EMMA GALCERÁN SOLSONA](#) Procedimiento de origen: MMC MODIFICACION DE MEDIDAS SUPUESTO CONTENCIOSO 0000952 /2020

Cabecera: Alimentos a favor de hijo mayor de edad. Extincion de la pension alimenticia. Reduccion de la cuantia de la pension alimenticia

En la demanda de modificación de medidas, interpuesta por el padre, se alegó, dicho sea en síntesis, que la sentencia de divorcio del año 2008, estableció la atribución de la guarda y custodia de la hija a la madre, siendo la patria potestad compartida, con un régimen de visitas y una pensión de alimentos para la hija de 500 euros mensuales, a cargo del padre, actualizables anualmente, alegándose por el demandante que se han alterado de forma sustancial las circunstancias que existían cuando se dictó dicha sentencia, siendo la relación con su hija buena hasta el año 2018, en que la hija tomó la determinación de no comunicarse con su padre, dando por zanjada la relación con su padre en enero de 2020, junto a otras alegaciones, por lo que solicitó que **se acordase la extinción de la pensión de alimentos** y como petición subsidiaria, la **reducción de la pensión de alimentos** al haber empeorado la situación del actor, solicitando su fijación en el importe de 150 euros al mes y limitada al plazo de un año.

PROCESAL: Aclaracion y rectificacion de error. Subsancion de omision y complemento

Jurisdicción: Civil

Ponente: [Emma Galcerán Solsona](#)

Origen: Audiencia Provincial de Valladolid

Fecha: 11/10/2022

Tipo resolución: Sentencia

Sección: Primera

Número Sentencia: 364/2022

Número Recurso: 318/2022

Numroj: SAP VA 1575:2022

Ecli: ES:APVA:2022:1575

ENCABEZAMIENTO:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

VALLADOLID

SENTENCIA: 00364/2022

Modelo: N10250

C.ANGUSTIAS 21

Teléfono: 983.413486 **Fax:** 983413482/983458513

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MSV

N.I.G. 47186 42 1 2007 0010060

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000318 /2022

Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: MMC MODIFICACION DE MEDIDAS SUPUESTO CONTENCIOSO 0000952 /2020

Recurrente: Saturnino

Procurador: MARIA MONSERRAT PEREZ RODRIGUEZ

Abogado: MARIA INMACULADA PACHES MATEU

Recurrido: Fidela

Procurador: MARIA EUGENIA LOPEZ ARNAIZ

Abogado: FRANCISCO ROJO CUESTA

SENTENCIA num. 364/2022

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA

D. FRANCISCO SALINERO ROMAN

D^a EMMA GALCERAN SOLSONA

En VALLADOLID, a once de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en grado de apelación, los autos de Modificación de Medidas Supuesto Contencioso núm. 952/2020 del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Valladolid, seguido entre partes, de una como **DEMANDANTE-APELANTE D. Saturnino**, representado por la Procuradora Dña. MARÍA MONSERRAT PÉREZ RODRÍGUEZ y defendido por la Letrada Dña. MARÍA INMACULADA PACHES MATEU, y de otra como **DEMANDADA-APELADA Dña. Fidela**, representada por la Procuradora Dña. MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARNAIZ y defendida por el Letrado D. FRANCISCO ROJO CUESTA.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 22/02/2022, se dictó sentencia y en fecha 10/03/2022, auto denegando aclaración, cuyo fallo y parte dispositiva, respectivamente, dicen así:

"Se estima parcialmente la demanda de modificación de medidas interpuesta por la procuradora Doña Montserrat Pérez Rodríguez, en nombre y representación de DON Saturnino, frente a DOÑA Fidela, acordando modificar la medida relativa a la pensión de alimentos establecida en la Sentencia de 21 de noviembre de 2008, dictada por este Juzgado en los autos de Divorcio Contencioso nº 639/2007, quedando establecida de la siguiente forma:

-No procede la extinción de la pensión de alimentos.

-Se acuerda la reducción de la cuantía de la pensión de alimentos que Don Saturnino debe abonar por su hija Margarita, quedando fijada la misma en la cantidad en doscientos euros mensuales (200), cantidad que debe abonar dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta designada por Doña Fidela y se actualizará anualmente conforme a las variaciones que experimente el I.P.C que determine el I.N.E u Organismo que lo sustituya. La pensión de alimentos se extinguirá de forma automática cuando Margarita finalice el grado que ésta estudiando.

No se realiza imposición de costas."

DEL AUTO DE ACLARACION DE FECHA 10-3-22

"ACUERDO:

Desestimar la petición formulada por la representación procesal de D. Saturnino de aclarar y completar la sentencia, por exceder del contenido de la aclaración, pudiendo en su caso, presentar recurso de apelación.

Mantener y no variar el texto de la referida resolución."

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la Procuradora Dña. María Monserrat Pérez Rodríguez, en nombre y representación de D. Saturnino, se interpuso recurso de apelación dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó escrito de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 28/09/2022, en que ha tenido lugar lo acordado.

Vistos, siendo Magistrada-Ponente la **Ilma. Sra. Dña. EMMA GALCERÁN SOLSONA.**

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- En la demanda de modificación de medidas, interpuesta por el padre, se alegó, dicho sea en síntesis, que la sentencia de divorcio del año 2008, estableció la atribución de la guarda y custodia de la hija a la madre, siendo la patria potestad compartida, con un régimen de visitas y una pensión de alimentos para la hija de 500 € mensuales, a cargo del padre, actualizables anualmente, alegándose por el demandante que se han alterado de forma sustancial las circunstancias que existían cuando se dictó dicha sentencia, **siendo la relación con su hija buena hasta el año 2018, en que la hija tomó la determinación de no comunicarse con su padre** (según la demanda), dando por zanjada la relación con su padre en enero de 2020, junto a otras alegaciones, por lo que solicitó que se acordase la extinción de la pensión de alimentos y como petición subsidiaria, la reducción de la pensión de alimentos al haber empeorado la situación del actor, solicitando su fijación en el importe de 150 € al mes y limitada al plazo de un año.

SEGUNDO.- Esta Sala ha indicado en numerosas sentencias con un carácter general, entre otras, en la sentencia de fecha 11 de marzo de 2022, en el recurso RPL-521/2021, Fundamento de Derecho Primero, "Como ha declarado esta Sala, entre otras, en la sentencia de fecha 8 de febrero de 2021, RPL-433/2020, F.D. Primero, "Según la jurisprudencia de las Audiencias, la acción de modificación de medidas exige:

1º- Que haya existido y así se acredite, una modificación o alteración de las circunstancias tenidas en cuenta para su adopción.

2º. Que dicha modificación o alteración sea sustancial, de tal importancia que haga suponer que, de haber existido tales circunstancias al momento de la separación o el divorcio, se habrían adoptado medidas distintas, al menos en su cuantía si se trata de prestaciones económicas.

3º. Que tal alteración no sea esporádica o transitoria, sino que presente caracteres de estabilidad o permanencia.

4º. Que la referida modificación o alteración no haya sido provocada o buscada voluntariamente o de propósito para obtener una modificación de las medidas ya adoptadas y sustituirlas por otras que resulten más beneficiosas para el solicitante. Por tanto, la razón de ser del proceso de modificación de medidas es realizar un juicio comparativo entre dos momentos, el de la sentencia que fija las medidas y el de la demanda de modificación de medidas, así como la situación actual, quedando fuera de su objeto lo relativo a la nueva valoración de la posible sujeción a Derecho de las circunstancias tomadas en cuenta en aquel primer momento."

"A la hora de resolver en relación con la **pensión de alimentos del hijo mayor de edad**, deber tomarse en consideración que en estos casos el derecho se apoya fundamentalmente en el principio de solidaridad familiar, que, a su vez, debe ponerse en relación con la actitud personal de quien se considera necesitado (arts. 152 y 93 CC), debiendo valorarse las situaciones de verdadera necesidad, valorándose las circunstancias que sean relevantes, entre otras,

- si el hijo ha accedido al mercado laboral,
- si la situación de necesidad ha sido creada, o no, por la conducta del hijo,
- si por parte del hijo se ha demostrado la necesaria diligencia en el desarrollo de su carrera académica y laboral. (SS. TS. de 5 de noviembre de 2008, 8 de noviembre de 2012, 12 de julio de 2015)."

"Como recuerda la sentencia de instancia, "El derecho de alimentos de los hijos mayores de edad continuado o sobrevenido a la extinción de la patria potestad conforme al artículo 93.2 del Código Civil se apoya fundamentalmente en lo que la doctrina civilista ha denominado «principio de solidaridad familiar» que, a su vez, debe ponerse en relación con la actitud personal de quien se considera necesitado (art. 152 C.C); y de este modo, se concluye que el contenido de la obligación de prestar alimentos respecto de los hijos

mayores de edad se integra sólo por las situaciones de verdadera necesidad y no meramente asimiladas a las de los hijos menores."

"Por ello en tales supuestos el juez fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes del código civil (STS de 19 enero 2015), pues como recoge la STS de 12 febrero 2015 , se ha de predicar un tratamiento diferente «según sean los hijos menores de edad, o no, pues al ser menores más que una obligación propiamente alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para

darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención»."

"Tal distinción es tenida en cuenta en la sentencia del T.S. nº 603/2015, de 28 octubre."

"La ley no establece ningún límite de edad para fijar pensión de alimentos y, de ahí, que el casuismo a la hora de ofrecer respuestas sea amplio en nuestros tribunales, en atención a las circunstancias del caso y a las socioeconómicas del momento temporal en que se postulan los alimentos. Partiendo de que el periodo de formación se encuentra finalizado, se ha negado alimentos por tener el hijo trabajo, aunque fuese precario, y en otras ocasiones por ser, aún sin tener trabajo, demasiado selectivo en las características del empleo pretendido."

TERCERO.- La sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 5 de febrero de 2019, núm. 104/2019, aborda la cuestión de si la ausencia continuada de relación de los hijos mayores de edad con el progenitor alimentante, puede ser causa de extinción de la pensión alimenticia.

Según la mencionada sentencia, para analizar la posible integración en el art. 853-2ª CC, ha de acudirse a la doctrina de la Sala sobre la fundamentación del derecho de alimentos de los hijos mayores de edad, que radica en **la solidaridad familiar** e intergeneracional, de modo que si esa solidaridad desaparece por haber incurrido el hijo en alguna de las conductas reprobables previstas en la ley, es lícita la extinción, porque no es equitativo que quien renuncia a la relación familiar se beneficie de una institución jurídica que se funda, precisamente, en los vínculos familiares, por lo que sería razonable acudir, desde ese primer plano, a una interpretación flexible a efectos de la extinción de la pensión alimenticia, conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen, en tanto en cuanto el legislador nacional no la prevea expresamente,

no obstante lo cual, debe entrar en consideración un segundo plano, la valoración de la concurrencia y prueba de la causa, esto es, la falta de relación manifiesta y que esa falta sea imputable, de forma principal y relevante, al hijo, sería objeto de una interpretación rigurosa y restrictiva, declarando el Alto Tribunal que sí es relevante la causa de la ausencia de relación, pues para acordar la extinción de la pensión ha de aparecer probado que la falta de relación entre padre e hijos es, de modo principal y relevante, imputable a éstos.

CUARTO.- Como ha declarado esta Sala en relación con la naturaleza del recurso de apelación, entre otras, en la sentencia de 27 de noviembre de 2008, RPL-252/2018, "la más adecuada solución del mismo determina la necesidad de entrar en el examen y valoración de la prueba que obra unida a las actuaciones y ha sido tenida en consideración por la Juez de Instancia, pues el carácter ordinario del recurso de apelación -que efectivamente lo es-, somete al Tribunal que del mismo entiende el total conocimiento de la controversia suscitada, si bien siempre dentro de los límites del objeto o contenido del recurso y con respeto a la obligada congruencia. Desde esta perspectiva cabe señalar que, tal y como ya es criterio uniforme, reiterado y constante de esta misma Audiencia Provincial (Sección Primera) en sintonía con el criterio jurisprudencial sentado, entre otras, en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2015, solo será factible criticar la valoración que efectúe el Juzgador "a quo" de la prueba practicada cuando la efectuada en la instancia fuese ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica (SSTS de 9 de marzo de 2010, 11 de noviembre de 2010); se hubiera incurrido en un error patente, ostensible o notorio (SSTS de 10 noviembre 1994, 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002); se extrajeren de la misma conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica (SSTS de 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002, 13 diciembre 2003, 9 junio 2004); o finalmente, si se adoptasen en ella criterios desorbitados o irracionales (SSTS de 28 enero 1995, 18 diciembre 2001, 19 junio 2002)."

Y en relación con la eficacia de la prueba de peritos, la Sala Primera tiene declarado (STS. de 22 de febrero de 2006, RC Nº 1419/1999), que el juicio personal o la convicción formada por el informante con arreglo a los antecedentes suministrados no vincula a jueces y tribunales, que pueden apreciar esta según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a las conclusiones del perito (STS. de 16 de octubre de 1980), de las que pueden prescindir (STS. de 16 de febrero de 1994).

En relación con dicha cuestión, tiene declarado la jurisprudencia, asimismo, que los tribunales, al valorar los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica (art. 348 de la LEC), deberán ponderar los razonamientos que contengan los dictámenes y los que se hayan vertido en el acto del juicio o vista en las declaraciones de los peritos, pudiendo no aceptar el Tribunal el resultado de un dictamen o aceptarlo, o incluso aceptar el resultado de un dictamen por estar mejor fundamentado que otro; debiendo también tenerse en cuenta las conclusiones conformes y mayoritarias que resulten tanto de los dictámenes de peritos designados por las partes, como de los emitidos por peritos designados por el Tribunal, motivando su decisión cuando no esté de acuerdo con las conclusiones mayoritarias de los dictámenes, debiéndose examinar igualmente las operaciones periciales que se hayan realizado concretamente, los medios, métodos o instrumentos empleados y los datos en que se sustenten los dictámenes, así como la competencia profesional de sus autores y las circunstancias que hagan presumir su objetividad (SS.TS de 10 de febrero de 1994, 28 de enero de 1995, 31 de marzo de 1997, 30 de noviembre de 2010, 15 de diciembre de 2015, 17 de mayo de 2016, entre otras muchas).

QUINTO.- Sentado lo precedente, debe desestimarse la petición de extinción de la pensión de alimentos, formulada en el recurso de apelación y antes en la demanda, ya que no quedó acreditada que la nula relación entre padre e hija sea imputable de modo principal y relevante a la hija, de conformidad con el criterio del Tribunal Supremo analizado en el Fundamento Tercero de la presente sentencia, y a este respecto cabe destacar que el padre

- se trasladó a vivir a Castellón de la Plana,
- disminuyendo la frecuencia de las visitas,
- incumpléndose las visitas por parte del padre, quien solicitó una reducción del régimen de visitas, que tampoco fue cumplido por el padre, sin acreditarse justa causa,
- viviendo la niña la figura paterna como la de un padre ausente, no entendiendo la hija por qué su padre no venía a verla

, y posteriormente, en enero de 2020, la hija le comunicó que daba por zanjada la relación, reprochándole que durante esos años causó mucho daño a la hija, por los actos del padre o más bien por los que le han faltado por hacer, por todo lo cual, como antes se indicó, debe confirmarse la desestimación de dicha pretensión, al no existir en la sentencia de Primera Instancia ninguna de las notas o características negativas, a que alude la doctrina jurisprudencial reseñada en el Fundamento de Derecho Cuarto, acerca de la valoración de la prueba.

A lo anterior debe añadirse la consideración de que la reducción de la cuantía de la pensión de alimentos, que se establece en la sentencia de Primera Instancia, produce sus efectos desde la fecha de la sentencia apelada, que modifica la anterior sentencia en dicho particular, y no desde un momento anterior, con la consiguiente desestimación de lo solicitado en el apartado 2º-a) del suplico del recurso de apelación, todo ello de conformidad con la jurisprudencia consolidada en la materia (

SS.TS. de 2 de diciembre de 2015,

20 de junio de 2017,

20 de julio de 2017, e.o.,

SS.AP Valladolid, Sección Primera de 1 de febrero de 2021, RPL-361/2020, de 6 de abril de 2021, RPL-452/2020, de 10 de junio de 2022, RPL-107/2022, entre otras); procediendo asimismo desestimar la petición del apartado 2º-b) del suplico del recurso de apelación, de limitación a un año, ya que carece de argumentación que permita ser acogida, procediendo confirmar el acuerdo de extinción de la pensión de alimentos de forma automática cuando la hija finalice el grado que está estudiando, acuerdo contenido en el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta que cuando ésta se dictó, la hija se encontraba en el segundo curso del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que está estudiando en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Valladolid, en la modalidad de enseñanza presencial, no habiendo abandonado sus estudios, pues

después de la E.S.O., obtuvo el título de Graduado en Educación Secundaria, y superó la prueba de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado superior, estudiando un curso de Administración y Finanzas, que finalizó, empezando el Grado antes mencionado, encontrándose en el segundo curso cuando se dictó la sentencia apelada, en la que no existe ninguna de las notas negativas a que alude la jurisprudencia reseñada en el Fundamento de Derecho Cuarto acerca de la valoración de la prueba.

Debe precisarse que en la alzada no se impugnó por ninguna de las partes la cuantía en sí misma considerada de la pensión de alimentos, establecida en la sentencia apelada, a la vista del escrito de la parte apelante de fecha 19/04/2022, puesto en relación con su anterior escrito de interposición del recurso de apelación, así como la manifestación de la parte apelada en su oposición al recurso, de aceptar el importe fijado en la sentencia de Primera Instancia, cuya confirmación íntegra solicita.

SEXTO.- De lo expuesto resulta la desestimación del recurso, confirmando íntegramente la sentencia con imposición a la parte apelante de las costas del recurso, ex art. 398-1 LEC.

VISTOS, los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

Se **desestima el recurso de apelación** interpuesto por la procuradora Dña. María Monserrat Pérez Rodríguez, en nombre y representación de D. Saturnino, contra la sentencia núm. 52/22 de fecha 22/02/2022, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Valladolid, **confirmándola** íntegramente, con imposición a la parte apelante de las costas del recurso de apelación.

La confirmación de la resolución de instancia supone la pérdida del depósito para apelar consignada por la parte recurrente, al que se dará el destino legal. (D. A. 15ª de la L.O.P.J. según redacción de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre).

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe, en su caso, interponer recurso de casación, ante esta sala, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.